



CSJ 2367/2017

ORIGINARIO

Agrofina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/
acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 20 de Abril de 2023

Vistos los autos: "Agrofina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 35/52 se presenta Agrofina S.A., inicia acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se despeje el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse, frente a la pretensión de la demandada -plasmada en la resolución DJRAF-R 0018/2017- de aplicarle, con sustento en lo establecido en el artículo 18 de la ley 10.412 (ley impositiva local para el año 2017), una alícuota diferencial más gravosa en relación al impuesto sobre los ingresos brutos, por el período junio de 2017, por el hecho de no tener su planta industrial en la jurisdicción provincial.

Solicita que el Tribunal se pronuncie sobre la validez constitucional de la citada ley por entender que viola los artículos 9°, 10, 11, 12, 75, inciso 13, y concordantes de la Constitución Nacional.

Expone que es una empresa que se dedica a la investigación, desarrollo, producción y venta de productos agroquímicos genéricos de primer nivel, tales como "herbicidas, fungicidas, curasemillas, fito-reguladores, insecticidas y coadyuvantes", cuyas sedes se encuentran ubicadas: dos de ellas en la Provincia de Buenos Aires (la planta industrial en Zárate, y la sede de administración y ventas en el partido de Vicente

López), y la otra, el laboratorio de investigación y desarrollo, en Villa Devoto, C.A.B.A. (fs. 36).

Aduce que, con sustento en el artículo 16 de la ley impositiva local 10.412 ("reenvío" del artículo 18), la Provincia de Córdoba le reclama la aplicación de una alícuota mayor en el gravamen (2,40%) contemplada para el comercio mayorista de "agroquímicos y fertilizantes", para el período 2017/6, sobre la base de que su establecimiento industrial no se encuentra en jurisdicción territorial, en vez del 0,50% previsto para su actividad de "fabricación de sustancias químicas y de productos químicos..." contemplada en el artículo 13 de la citada norma (fs. 36 vta./37).

Añade que la demandada le reclama una diferencia de \$ 1.366.082,17 en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por el período cuestionado (fs. 36 bis).

Concluye en que la aplicación de alícuotas diferenciales en virtud del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente viola el principio de igualdad previsto en el artículo 16 de la Ley Fundamental, "al efectuar una diferenciación arbitraria e irrazonable". Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.

A su vez, desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia formal de la acción declarativa.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Finalmente, requiere el dictado de una medida cautelar, en los términos del artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, por la que se le impida a la Provincia de Córdoba continuar con el procedimiento administrativo en el cual se reclaman las supuestas diferencias en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por el período 2017/6; se impida a la demandada ejecutar por cualquier medio judicial o administrativo la supuesta deuda liquidada en la resolución DJRAF-R 0018/2017 ya citada, así como los intereses, multas y sanciones derivadas de esta, y se suspenda a su respecto la vigencia del régimen de alícuotas previsto para el impuesto sobre los ingresos brutos en la norma que aquí cuestiona, de modo tal que se la habilite a ingresar el gravamen aplicando la alícuota del 0,5%, prevista para su actividad cuando se trate de contribuyentes con establecimiento en la jurisdicción demandada.

II) A fs. 55 dictaminó la señora Procuradora Fiscal y a fs. 68/69 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa e hizo lugar a la medida cautelar solicitada.

III) A fs. 104/135 la Provincia de Córdoba contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, reproduce los artículos 18 de la ley impositiva provincial 10.412 y 215, inciso 23, del Código Tributario (t.o. por el decreto local 400/2015).

Destaca -entre otras consideraciones- que el objetivo de la medida fiscal en cuestión debe entenderse como una política de promoción y fomento enmarcada en la potestad tributaria provincial de promover la industria local y estimular su desarrollo, reservada para sí a través del artículo 125 de la Constitución Nacional, en la búsqueda de concretar la llamada cláusula del progreso o desarrollo al que se refiere el artículo 75, inciso 18, de la Ley Fundamental.

Niega que se verifique la discriminación denunciada por el contribuyente, pues la provincia únicamente considera -a los fines de ese tributo- la actividad efectivamente desarrollada en su territorio que no es la industrial en este caso, con prescindencia del origen nacional o importado del producto (fs. 109 vta.).

Más adelante, hace consideraciones sobre el hecho imponible y su regulación en el código tributario provincial, y alega que la actora confunde su actividad principal, que configura su objeto social, que puede ser la actividad industrial, con aquellos supuestos de hecho que configuran el aspecto material de los distintos hechos imponibles cuya ocurrencia en la realidad generan, luego de su vinculación a un sujeto determinado, el nacimiento de distintas obligaciones tributarias según el ámbito territorial donde hubieren acaecido (véase fs. 117/117 vta.).



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Alega que Agrofina S.A. realiza en la Provincia de Córdoba "operaciones de comercialización de compra-venta", que constituye un hecho imponible alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos con una alícuota diferente de la que se contempla para la actividad industrial (fs. 130). En consecuencia, dice, la aplicación de la alícuota dispuesta para quienes no desarrollen actividad industrial en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba "no crea desigualdades entre los contribuyentes que están en similares condiciones o categorías..." (fs. 132).

IV) A fs. 178 se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuyo transcurso se dispuso un traslado por su orden a las partes, el que fue contestado a fs. 179/183 vta. y 185/194, por la actora y demandada, respectivamente.

V) A fs. 197 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", donde opinó, en lo que aquí interesa, que correspondía hacer lugar a la demanda planteada. Por último, a fs. 198, se pasan los autos para dictar sentencia.

Considerando:

1°) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 68/69, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2°) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley impositiva local 10.412, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En ese sentido, en el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, de la prueba documental agregada a la causa (v. la resolución DJRAF-R 0018/2017 y el formulario de notificación F-904, cuyas copias obran a fs. 25/27), se desprende que la actividad desplegada por la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, precedentemente citado, entre otros).



Corte Suprema de Justicia de la Nación

En consecuencia, corresponde concluir en que se han reunido los recaudos exigidos por el artículo 322 del código de rito, para la admisibilidad de la acción declarativa.

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencias del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones allí expuestos corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de la ley impositiva que se cuestiona, en el caso concreto, al gravar a la actora su actividad (fabricación de sustancias químicas y de productos químicos) con la alícuota del 2,40%, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias (v. fs. 36 vta., la resolución DJRAF-R 0018/2017 y el formulario de notificación F-904 ya citados, así como el recurso de reconsideración cuya copia obra a fs. 29/34).

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3° precedente, y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el *sub examine* queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en

función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Ley Fundamental (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480, entre otros).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Agrofina S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 10.412 de la Provincia de Córdoba, como así también de la pretensión fiscal fundada en dicha normativa (resolución DJRAF-R 0018/2017). Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Parte actora: **Agrofina S.A.**, representada por su letrado apoderado, **Dr. Luis Marcelo Nuñez**.

Parte demandada: **Provincia de Córdoba**, representada por las **Dras. Leticia Valeria Aguirre y Sonia Laura Trinidad**, con el patrocinio letrado de la **Dra. Julia Enriquez**.